



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Dora Alicia Munera Mesa y Juan Fernando Munera Mesa
DEMANDADOS	Colpensiones y UGPP
RADICADO	05-001-31-05- 002-2019-00745
TEMA	Pensión de vejez
DECISIÓN	Revoca sentencia

El veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **182** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **DORA ALICIA MUNERA MESA** y **JUAN FERNANDO MUNERA MESA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-** y la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-**, con radicado 05-001-31-05-002-2019-00745.

• **RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:**

En los términos del poder conferido por el doctor **FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI**, obrando en calidad de representante legal para procesos de **COLPENSIONES** de la firma **PALACIO CONSULTORES S.A.S.**, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería suficiente para actuar a la Dra. **LEIDY VERÓNICA GONZÁLEZ LÓPEZ**, identificada con cédula de ciudadanía 44'006.250 y portadora de la tarjeta profesional 196.444 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de la entidad hasta su culminación en el presente proceso judicial.

- **HECHOS:**

Los demandantes señalaron como supuestos fácticos de la acción: que la señora María Alicia Mesa Munera arribó a los 55 años de edad el 22 de julio de 2014. Que era beneficiaria del régimen de transición, pues para el 1º de abril de 1994 contaba con 15 años de servicios, por lo que le era aplicable el artículo 7º de la ley 71 de 1988. Que estuvo afiliada régimen de prima media con prestación definida en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo y después a la Colpensiones. Que laboró al servicio del estado como empleada pública ante el ministerio mencionado desde el 10 de diciembre de 1971 y hasta el 15 de noviembre de 1991, por un total de 7168 días. Que cuenta con 8,57 semanas cotizadas a Colpensiones al entre el 1º de junio de 2014 y el 30 de julio de 2014 en calidad de trabajadora independiente. Que solicitó el 24 de julio del mismo año la pensión de vejez por aportes a Colpensiones, pero esta fue negada a través de la resolución GNR 357998 de 2014 y GNR 34933 del 2015, declarándose incompetente para conocer de la prestación. Que falleció el 30 de julio de 2016. Que dejó dos herederos, esto es, los demandantes, quienes son mayores de edad.

- **PRETENSIONES:**

Aspiran los demandantes se condene a las demandadas al reconocimiento y pago de la pensión de vejez por aportes consagrada en el artículo 7º de la ley 71 de 1988 desde el 31 de julio de 2014 hasta la fecha de fallecimiento de la causante, intereses moratorios o en subsidio la indexación.

- **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Colpensiones. Se opuso a la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación de reconocimiento de la pensión de vejez conforme al art 7 ley 71/1988, inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora, prescripción, imposibilidad de condena en costas y la genérica.

UGPP. Se opuso a la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la

obligación, inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora, compensación, prescripción, imposibilidad de condena en costas.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 26 de agosto de 2020 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago a favor de la masa sucesoral de la señora María Alicia Mesa Munera, la suma de \$2.796.369 por concepto de mesadas pensionales reconocidas post mortem a respecto de la pensión de jubilación establecida en el artículo 7° de la ley 71 de 1988 por el período causado entre el 1° de agosto del año 2014 al 30 de julio de 2016, pero teniendo en cuenta la prescripción de las prestaciones no reclamadas con anterioridad al 30 de abril del año 2016. Que dichos dineros deben ser indexados. Señaló que para la reclamación de los dineros objeto de reconocimiento, los demandantes deberán acreditar ante Colpensiones la sucesión testada o intestada correspondiente y debidamente legalizada ante por autoridad competente al efecto. Ordenó a Colpensiones a realizar los trámites interadministrativos necesarios para solicitar ante la entidad que corresponda el pago del bono pensional respectivo o la cuota parte respectiva, si a ello hay lugar, sin que sea de recibo que la entidad aduzca que se sustrae del reconocimiento ordenado de conformidad con el último párrafo del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003. Absolvió de todo lo demás. Las costas procesales quedaron a cargo de Colpensiones.

- **APELACIÓN:** La decisión de instancia fue recurrida en apelación por los demandantes y Colpensiones, en los siguientes términos:

Demandantes: En un primer momento se oponen a la prosperidad de la excepción de prescripción decretada por el juzgado del conocimiento, al señalar que el término trienal de que tratan los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo deben contabilizarse desde el momento de la última solicitud resuelta por la UGPP mediante resolución del 16 de febrero de 2018 y no desde que se le elevó la reclamación a Colpensiones, pues esta última entidad alegó no ser la competente para resolver el asunto pensional. También se opuso a la absolución por intereses moratorios, al señalar que la jurisprudencia, tanto de

la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, aceptan dichos intereses en pensiones reconocidas bajo la ley 71 de 1988.

Colpensiones: Su única oposición se dirigió respecto de las costas procesales, al advertir que dicha condena no debe proceder en virtud del cambio de criterio jurisprudencial respecto de la sumatoria de tiempos con ley 71 de 1988.

- **CONSULTA:**

Por ser la sentencia desfavorable a los intereses de Colpensiones, se remitió el expediente a esta Sala para ser conocido el proceso en grado jurisdiccional de consulta.

- **ALEGATOS:** Fueron presentados por las demandadas en los siguientes términos:

Colpensiones: *“No es posible entrar a reconocer una prestación económica sin estar debidamente ajustada a la ley, para el reconocimiento de la pensión por aportes consagrada en el artículo 7 de la ley 71 de 1988, a cargo de COLPENSIONES, pues no es la entidad legitimada por pasiva para responder dicha prestación de la señora MARIA ALICIA MESA MUNERA, ya que se logra observar que para el presente caso, no se cumplen con los requisitos exigidos por el decreto 2709 de 1994 que reglamente el artículo 7 de la ley 71 de 1988 en su artículo 10 que consagra: “Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes”. Tal como se observa en la historia laboral de la señora MARIA ALICIA MESA MUNERA, los aportes efectuados de manera discontinua al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, corresponden a 60 días que equivalen a 8,57 semanas por lo cual, Colpensiones ser la última entidad de Previsión a la cual se realizaron los aportes, estos no corresponden a las 6 años requeridos, por lo tanto será la UGPP, la entidad encargada de realizar dicho reconocimiento, siendo la entidad de previsión a la cual la demandante realizo mayor tiempo de aportes. Con respecto a los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 no es viable, toda vez que no se le ha reconocido la pensión de jubilación por aportes a la señora MESA MUNERA y no estaría en mora Colpensiones en el cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del decreto 2709 de 1994 establece: “Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente. Para el efecto de las cuotas partes*

a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión”

UGPP: *“Obra dentro del proceso Certificado de información laboral proferido por EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL de fecha 06 de septiembre de 2012, mediante el cual se establece que la señora MARIAALICIA MESA MUNERA laboró para el Estado del 10 de diciembre de 1971 al 15 de noviembre de 1991; las cotizaciones de pensión las realizó a CAJANAL; Ahora bien, revisada la Pagina de Bonos Pensionales, se logra evidenciar que la causante fue incluida en una Nómina Especial, la cual señala, que cotizó a COLPENSIONES por un periodo de 30 días del 01 al 30 de junio del 2014; así las cosas es claro que le asiste razón al Juez de primera instancia para absolver a la entidad que represento, y declara la inexistencia de la obligación respecto a la UGPP (...) Finalmente y de conformidad con lo expuesto con la sentencia impugnada, solicito la misma sea confirmada por cuanto fue proferida conforme a las normas que regulan la prestación y el fenómeno jurídico de las prescripción”*

- **DECRETO 806 DE 2020:** Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.*

CONSIDERACIONES:

El problema jurídico a resolver por esta Sala se centrará en determinar lo siguiente: **i)** si la señora María Alicia Mesa Munera en vida dejó causada la pensión de vejez como beneficiaria del régimen de transición aplicándosele la ley 71 de 1988; **ii)** procedencia de la excepción de prescripción; **iii)** establecer si sus herederos tienen derecho a percibir el retroactivo pensional, intereses moratorios o en subsidio la indexación; **iv)** si se causaron costas procesales a cargo de la demandada.

- i) *Pensión de vejez por aportes, ley 71 de 1988***

Mediante resolución GNR 357998 del 13 de octubre de 2014¹, Colpensiones le negó a la señora María Alicia Mesa Munera la pensión de vejez al señalar que esta solo acreditó 8 semanas de cotización. Decisión que fue modificada mediante resolución GNR 34933 del 14 de febrero de 2015², en la que se resolvió declarar la pérdida de competencia frente al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, ordenando remitir como consecuencia el expediente ante la UGPP.

Del contenido del acto administrativo ADP 006946 del 2 de octubre de 2018³, la UGPP hace relación a las decisiones que tomó frente al reconocimiento pensional en favor de la señora Mesa Munera y de sus hijos, hoy demandantes, en las que se relacionaron las siguientes resoluciones:

- *RDP 42594 del 16 de octubre de 2015. Negó la pensión de vejez a la señora Mesa Munera.*
- *RDP 2914 del 27 de enero de 2016. Negó nuevamente la pensión de vejez a la señora Mesa Munera.*
- *ADP 10434 del 18 de agosto de 2016. se aclaró que no había lugar a emitir nuevamente pronunciamiento frente a la solicitud por firmeza de los actos administrativos. Se solicitó documentación de semanas cotizadas para continuar con el estudio pensional.*
- *ADP 775 del 1º de febrero de 2017. Se aclaró sobre la reiteración de completitud documental.*
- *RDP 37927 del 3 de octubre de 2017. Negó el reconocimiento de la pensión de vejez post mortem y pago a herederos.*
- *RDP 45890 del 5 de diciembre de 2017. Resolvió recurso de reposición, confirmando la decisión anterior.*
- *ADP 196 del 15 de enero de 2018. Se ordenó la apertura de pruebas.*
- *RDP 6224 del 16 de febrero de 2018. Resolvió recurso de apelación, confirmando en todas sus partes la resolución RDP 37927 del 3 de octubre de 2017.*

La señora Mesa Munera falleció el 30 de julio de 2016, hecho que se acredita con el registro civil de defunción de folios 92 del expediente; sin embargo, en vida fue beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la

¹ Folios 39

² Folios 45

³ Folios 53

ley 100 de 1993, pues para la entrada en vigencia de dicha normatividad contaba con 39 años de edad y poco menos de 20 años de servicios, por lo que también acredita las exigencias del acto legislativo 01 de 2005 para que el régimen de transición se le extienda hasta el año 2014.

A folios 55 del expediente milita certificado de períodos de vinculación laboral para bonos pensionales, que da cuenta que prestó sus servicios en favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo, específicamente, en la Caja Agraria, desde el 10 de diciembre de 1971 hasta el 15 de noviembre de 1991, con una interrupción de 7 días en julio de 1987, lo que equivale a 1.024,¹⁴ semanas.

Para resolver el asunto objeto de litigio, es importante precisar que la ley 100 de 1993 en su artículo 36, consagró el régimen de transición pensional como una protección a aquellas personas que, a juicio del legislador, estaban próximas a cumplir los requisitos para acceder a su pensión; para este grupo poblacional dispuso que se respetarían las condiciones de edad, semanas cotizadas y monto consagradas en el régimen anterior.

Para causar el derecho a la pensión con fundamento en la ley 71 de 1988, se requiere que se acredite 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, siempre y cuando cumpla 55 años de edad, siendo liquidada la pensión con una tasa de reemplazo del 75%.

En el caso de autos la afiliada logró acreditar 1.024,¹⁴ semanas de servicios con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo y 8,⁵⁷ semanas de cotización con Colpensiones, lo que arroja un total de 1.032,⁷¹ semanas, esto es, 20,⁰⁸ años.

Para resolver el asunto objeto de litigio, es necesario pronunciarse frente a la sumatoria de tiempos servidos a entidades públicas con las cotizadas a través de Colpensiones. Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en especial en sentencia SL4457-2014, advirtió “...para efectos de la pensión de jubilación por aportes que deba aplicarse en virtud del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue

o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social" Esta sentencia sirvió de base para permitir en adelante que en aplicación de la ley 71 de 1988 se permita la sumatoria de tiempo públicos y privados sin que sea relevante si fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social.

Mas adelante fue desarrollado tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional la posibilidad de sumar tiempo públicos y privados para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez. En especial, la SU-769 de 2014 proferida por la Corte Constitucional trató el tema en aplicación del decreto 758 de 1990.

De lo anterior se establece que a la señora María Alicia Mesa Munera, en vida, le asistía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en virtud de la ley 71 de 1988, por ser beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la ley 100 de 1993, prestación que debe ser reconocida a partir de la última cotización efectuada ante Colpensiones, esto es, a partir del 1º de agosto de 2014 y hasta el momento de su muerte el 30 de julio de 2016.

ii) Excepción de prescripción

Alegan los demandantes que no debe proceder tal medio exceptivo, debido a que desde que se elevó en 2014 la solicitud de reconocimiento pensional ante Colpensiones, dicho asunto solo fue dirimido en 2018 por la UGPP, por lo que es a partir de este momento en que debe contabilizarse el término de tres años de prescripción.

Pues bien, el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 4º de la ley 712 de 2001, referente a la reclamación administrativa, establece que las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta. Añadió el artículo que mientras esté pendiente el agotamiento de la

reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción.

A su turno, el artículo 151 de la misma codificación establece que las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.

Debe precisarse en este punto de la providencia la diferencia entre interrupción y suspensión de la prescripción. El primero de los términos da lugar con el simple reclamo escrito ante la entidad, lo que genera como consecuencia que la prescripción se interrumpa por un término de tres años; el segundo de los términos refiere a que, mientras se agota la reclamación administrativa, el término prescriptivo se suspende, lo que conlleva a que, una vez se dé dicho agotamiento, el término de prescripción comenzará a contabilizarse.

De lo anterior se establece que el término de prescripción se interrumpió por una única vez con el reclamo que la señora Mesa Munera le hiciera a Colpensiones el 24 de julio de 2014; prescripción que se vio suspendida hasta tanto se agotó la reclamación administrativa, esto es, el 21 de octubre del mismo año, momento para el cual le fue notificada la resolución GNR 357998 de 2014. Y es a partir de este momento que se contabiliza el término trienal de que trata el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que se contaba hasta el mismo día y mes de 2017 para presentar la demanda sin que se vieran afectadas las mesadas pensionales causadas.

No es de recibo lo manifestado por los demandantes en lo relacionado a que el término de prescripción debe contabilizarse a partir del año 2018, pues ello desconocería lo señalado en el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y en la sentencia C-792 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, providencia que aclara cuándo se entiende agotada la reclamación administrativa.

Atendiendo a que la demanda fue presentada ante la oficina de apoyo judicial de la ciudad de Medellín el 9 de diciembre de 2019⁴, se ven afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción todas aquellas mesadas pensionales causadas con anterioridad al mismo día y mes de 2016, esto es, la totalidad de las mesadas que en vida causó la señora Mesa Munera.

Y es que el juzgado del conocimiento cometió un error al contabilizar el término de prescripción desde el 30 de abril de 2019, momento para el cual los demandantes elevaron una nueva solicitud de pensión ante Colpensiones. Por una parte, se repite, el término de prescripción se interrumpe por una única vez, hecho que ocurrió el 24 de julio de 2014, por lo que contabilizar el término desde que se elevó una nueva reclamación desconoce de plano lo establecido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo. Por otro lado, al igual que se dijo en primera instancia, los demandantes no son beneficiarios de la prestación reclamada, únicamente son herederos de la causante, por lo que a estos no se les habilita nuevos términos para reclamar, en su lugar, todas las solicitudes las hacen en nombre de la señora Mesa Munera.

Atendiendo a la prosperidad de la excepción de prescripción y al no haber lugar a pago alguno por concepto de retroactivo pensional, se cae por su propio peso la pretensión consecuencial de intereses moratorios e indexación, por lo que la sentencia revisada por vía de apelación y consulta deberá ser **REVOCADA**, para en su lugar **ABSOLVER** a Colpensiones de la totalidad de las súplicas de la demanda.

iii) Costas procesales

Con fundamento en el numeral 4° del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas procesales de ambas instancias corren por cuenta de los demandantes y en favor de Colpensiones. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$908.526.

⁴ Folios 2

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Se **REVOCA** la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta al prosperar la excepción de prescripción. Como consecuencia, se **ABSUELVE** a las demandadas de la totalidad de las súplicas de la demanda.

Costas procesales y agencias en derecho quedan como se dejó dicho en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 113 del 30 de junio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>